



REVISTA
ENCRUCIJADA AMERICANA

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES - UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO

RELACIONES INTERNACIONALES E INTEGRACIÓN REGIONAL



UNA VISIÓN EPISTEMOLÓGICA SOBRE LA INTEGRACIÓN EN LA REGIÓN LATINO-CARIBEÑA Y SUS NECESIDADES DE MOVIMIENTO Y CAMBIO

An epistemological view of integration in the latin – caribbean region and its need for movement and change

Roberto Muñoz González¹ rmunoz@uclv.edu.cu

Recibido: 29 de septiembre de 2009 **Aprobado:** 15 de septiembre de 2010

Resumen: Este trabajo analiza los actuales procesos de integración en la región "latino-caribeña" y expone argumentos a favor de una concepción multidimensional de los mismos. Tal cosa implica traspasar la lógica contractualista económico-comercial, típica de los acuerdos impulsados por Estados Unidos, y construir procesos -o reforzar algunos en marcha- que contemplen las dimensiones políticas, sociales y económico-productivas. Estos procesos, dice el autor, deben considerar y promover la participación de las universidades de la región y de las empresas privadas. De esta forma se podrá enfrentar el desafío de construir una región más autónoma, equitativa, solidaria y productiva.

Palabras clave: Integración - América Latina y el Caribe - ALBA - ALCA

Abstract: This paper analyzes current integration processes in the "Latin-Caribbean" region and presents arguments in favor of a multi-dimensional conception of them. This implies going beyond the contractual economic commercial logic that is typical of agreements promoted by the United States, and constructing processes – or reinforcing some that are already underway – that make provisions for political, social and economic-productive dimensions. These processes, says the author, should consider and promote the participation of the region's universities and private companies. The challenge of building a more autonomous, equal, solidary and productive region can be faced this way.

Key words: Integration - Latin America and the Caribbean - ALBA - ALCA

¹Profesor Titular de Teoría y Pensamiento Económico de la Cátedra de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba. Doctor en Ciencias Económicas por la propia Universidad. Miembro del Tribunal Nacional de Grado Científico de la República de Cuba en el área de Economía Política y Relaciones Económicas Internacionales.

I. GENERALIDADES

Es sabido que en el sistema dominante de relaciones económicas internacionales, América Latina y el Caribe tienen una elevada dependencia productiva, comercial, financiera, tecnológica y cultural de los centros de la economía mundial y las transnacionales. Históricamente los países de la región fueron insertados (y lo siguen siendo) en la división internacional del trabajo de manera subordinada, jugando el papel principal de productores y exportadores de materias primas y productos agrícolas, así como el de consumidores e importadores de productos industriales y de alta tecnología, acentuando de esta manera su condición de región subdesarrollada, y deformando aún más sus estructuras económicas y societales en general. En este contexto la integración continúa siendo para el área, medio esencial para lograr el desarrollo y disminuir dicha dependencia.

Los esfuerzos teóricos y prácticos por alcanzar la unidad e integración de América Latina y el Caribe tienen una larga historia y vienen desde los siglos fundadores de nuestros estados y economías nacionales.² Sin embargo en el periodo posterior a la segunda mitad del siglo XX esta problemática alcanza real protagonismo, a tenor con las nuevas exigencias y necesidades de la vida económica, social y política del mundo y la región, así como de la aparición y desarrollo de un sistema de instituciones supranacionales en cuyo centro se encuentra la Organización de Naciones Unidas (ONU). En ese contexto, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) se convirtió no sólo en el principal centro generador de teorías sobre el desarrollo de la región, sino además en plataforma para la implementación de políticas económicas encaminadas al mismo fin. Desde entonces, y no obstante los altibajos que en su evolución se han producido, la integración se ha erigido en una de las variables de los modelos de desarrollo, concebidos e instrumentados en la región, hasta nuestros días. Por eso la integración regional continúa siendo, hoy más que nunca, un desafío para las economías latinoamericanas y caribeñas.

² Existe, sobre todo desde la mitad del siglo XX hasta nuestros días, un rico e interesante debate en torno a la integración, cuyos matices y enfoques van desde lo histórico, político y sociológico, hasta lo económico; aunque como se conoce “lo económico” no existe, ni puede existir, al margen de las demás dimensiones. Eso hace que las valoraciones, conceptos y teorías se muevan en un amplio diapasón epistémico y filosófico de carácter también diverso y contradictorio.

En la actualidad resulta obvio que la globalización plantea con urgencia la necesidad de repensar la reinserción internacional de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, para poder alcanzar el desarrollo económico y humano, pero bajo nuevos modelos; modelos alternativos que siempre deberán considerar lo particular-identitario, dentro de la universalidad y globalidad de los procesos de producción y reproducción de la vida humana, donde la integración resulta una condición necesaria (Plinio, 2008: 37). Por eso, no obstante algunos efectos desintegradores que tienen en la economía internacional el multilateralismo tipo OMC, así como ciertas formas de bilateralismo tipo ALCA, los procesos de integración regionales aparecen como una lógica respuesta colectiva, de búsqueda de consensos, para encarar los desafíos que significa el complejísimo proceso de inserción de las economías de los países subdesarrollados en la economía global; con mayor razón si observamos los nuevos esquemas bilaterales de acuerdos comerciales y de otra naturaleza, frecuentemente de marcado carácter asimétrico, que se están construyendo en nuestro hemisferio impulsados por los EE.UU..

Para América Latina y el Caribe resulta imprescindible entonces, que más allá del discurso, se comprenda verdaderamente que los procesos de integración están obligados a sobrepasar las estrechas agendas comerciales y económicas, alcanzando dimensiones más sociales, políticas y culturales; de ahí que la integración tiene que ser asumida como lo que es, un reto trascendente para todos los actores regionales: gobiernos, parlamentos, empresarios, universidades, sindicatos, comunidades y ciudadanos en general y, por tanto, debe ser abordada de forma conjunta y sistémica por todos los agentes de la sociedad, activos para el cambio y la transformación dialogantes.

La cuestión debe entenderse en dos direcciones básicas interrelacionadas: una primera que considere e incorpore todo lo positivo que hasta hoy se ha hecho en la región y en otras partes del mundo en materia de cooperación, complementación e integración, y una segunda dirección más creativa y novedosa que permita la construcción deliberada de nuevos paradigmas de acercamiento, complementación, unidad e integración, para llevar a

cabo las impostergables transformaciones estructurales que deben realizarse en las economías y sociedades latinocaribeñas, a partir de una voluntad política, también colectiva e inédita hasta ahora, no obstante los contradictorios y hostiles contextos regionales y globales en que deben construirse. Y aunque es cierto que la sociedad civil tiene un papel cada vez más protagónico en estos procesos transformativos, los Estados siguen siendo los sujetos de mayor responsabilidad y compromiso para alcanzar tales fines.

Todos los esfuerzos integracionistas que se realicen, tanto en el plano teórico como práctico, pueden ser dimensionados desde la economía política, considerando el hecho de que cada vez se hace más evidente el enfoque sistémico de la integración y la necesidad de tratarla, para su logro eficiente, desde el conjunto de las relaciones sociales de producción, vinculado a los problemas y necesidades del desarrollo de las fuerzas productivas, con mucha más razón en el grupo de los países subdesarrollados.

Todos reconocen que siempre los recursos son escasos, por tanto la racionalidad en su uso, la optimalidad en su asignación para el desarrollo, mucho tienen que ver con el carácter de su apropiación, distribución y consumo; lo que definitivamente se refleja en el bienestar de una mayor o menor parte de la población de una nación, región, o del mundo en general.

II. IMPORTANCIA DE LOS ESTADOS Y SUS GOBIERNOS EN LOS PROCESOS INTEGRACIONISTAS

Los procesos contemporáneos de globalización generan múltiples nexos e interconexiones que tienden a la unidad y dependencia de las partes que conforman el sistema mundial de economía y, en general, de la vida cultural de los hombres, los pueblos y las naciones; sin embargo esa misma dialéctica, también produce procesos fragmentadores de la totalidad. De ahí que el desarrollo de las sociedades, especialmente las ubicadas en la llamada periferia, se presente como un fenómeno complejo y contradictorio.

Entonces el desafío de cualquier estrategia de desarrollo económico y social, radica en la capacidad de los gobiernos y estados para lograr eficacia en las relaciones entre las partes que conforman la estructura del sistema; ya sea en la dimensión intranacional, intrarregional o global, pero también entre todas ellas. La efectividad de las conexiones presupone el desarrollo volitivo de acciones de confluencias y complementariedades, que autoafirmen el ser, el deber ser, pero sobre todo el poder ser latinoamericano y caribeño; en la integración dialéctica hacia adentro y hacia afuera, en modificar la estructura social y económica de los países, para una más eficaz inserción en la nueva división internacional del trabajo, en las condiciones que exige el progreso científico y tecnológico actual.

Hoy día los gobiernos de los territorios marginales o periféricos, se enfrentan a desafíos internos al desarrollo económico y social, que en gran medida y cada vez con más fuerza, pasan por la dependencia exterior, debido a la multiplicación de las interconexiones que generan los procesos globalizadores y ciertas hegemonías ejercidas por países o grupos de ellos. Extremando las situaciones, se pueden definir tres posibles orientaciones estratégicas a seguir por los gobiernos de estos países:

- Aceptar tácitamente *las condiciones* que imponen el capital internacional y las potencias hegemónicas para acceder a los mercados financieros, tecnologías y otros recursos, en aras de un “posible” desarrollo,
- asumir una *voluntad política* en función de los intereses de sus Estados y economías nacionales, que dignifique a los pueblos y gobiernos respectivos y,
- en íntima relación con la anterior, buscar formas más racionales y efectivas de integración, de complementación, de cooperación y de intercambio en las esferas comerciales, productivas y sobre todo en las científicas, tecnológicas, educativas, sanitarias y culturales, entre los países que conforman el mundo subdesarrollado (lo que de alguna manera se ha dado en llamar cooperación Sur-Sur).

Otro aspecto importante a considerar, especialmente por los hacedores de políticas económicas y sociales, es que la integración ha dejado de ser una cuestión meramente de

los Estados, a través de las iniciativas de los gobiernos, pues en la actualidad aparecen varios agentes participantes, también como actores fundamentales de estos procesos, los que están llamados a ser, o ya los son en algunos casos, los agentes más dinámicos del cambio social; entre ellos las diversas comunidades locales y territoriales, organizaciones de la sociedad civil, universidades, empresarios, corporaciones multinacionales, instituciones supranacionales, e inclusive los ciudadanos que perciben la realidad de sus respectivas sociedades e identidades (González, 2005). La cuestión está en crear las condiciones para que ellos, desde sus diferentes funciones, experiencias y espacios creativos, promuevan el uso de la comunicación y la tolerancia en la resolución de conflictos, influyendo a través de todos los niveles de educación directa e indirecta en la sociedad, y lleguen a convertirse en mediadores y eficaces actores de la unidad y el desarrollo de sus respectivos ámbitos locales.

Los gobiernos tienen la obligación legal y moral de dar voz, representación y participación a todos, para crear y desarrollar una cultura de autodesarrollo, cooperación e integración en los diversos niveles de la sociedad. Sin embargo la gran mayoría de los Estados nacionales y sus respectivos gobiernos, todavía están necesitados de una reconstrucción institucional, que desde la autoctonía y creatividad propios, permitan asumir de manera diferenciada lo mejor de la creación universal, única posibilidad de constituir Estados y economías *nacionales* coherentemente integrados y dinámicos, capaces de incorporar las masas populares a los proyectos emancipatorios y, por tanto, de lograr el desarrollo contemporáneo.

Desde finales del siglo XIX el intelectual y revolucionario cubano y latinoamericano, José Martí, al referirse a la significación de este asunto, planteó algunos presupuestos esenciales que por desventura aún están por lograrse en la región como totalidad. En su conocido ensayo *Nuestra América* apuntó:

“El gobierno ha de nacer del país”.

“El espíritu del gobierno ha de ser el del país”

“La forma del gobierno ha de avenirse a la constitución del país”.

“El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país” (Martí, 1975).

Para Martí la política, en tanto arte de organizar y dirigir a los hombres y a los pueblos, supone la necesidad de que los gobernantes conozcan los intereses, necesidades, aspiraciones, motivaciones e ideales de sus gobernados. “Gobernante, en un pueblo nuevo, quiere decir creador” (Martí, 1975). Pueblo nuevo, cultura nueva y seres humanos nuevos, que definitivamente suponen gobernantes y líderes también nuevos y creativos; portadores no solo de una alta ética y voluntad política, sino además de amplias competencias culturales y comunicativas para poder cumplir sus funciones políticas.

Se trata entonces de potenciar y re-crear las funciones de las instituciones tradicionales, creando además las nuevas que demanden las circunstancias contemporáneas, para revitalizar los diferentes factores de la nación; desarrollando la institucionalidad, los organismos gestores, los mecanismos e instrumentos para la gestión, la política pública y las investigaciones con fines prácticos, esto último resulta de vital importancia.

Ineludiblemente como hemos apuntado, la voluntad política posee un carácter de vital importancia; por tanto se necesitan líderes políticos con plena conciencia de que la región posee problemas internos y externos comunes que requieren de soluciones en conjunto; políticos con capacidades estratégicas y compromiso con sus pueblos para encabezar e impulsar los procesos de cambios.

III. AGENTES ESTRUCTURADOS Y DINÁMICOS PARA LA INTEGRACIÓN Y EL CAMBIO

En la inmensa mayoría de los países latinoamericanos no existe una verdadera integración de sus estados y economías nacionales. Es importante instrumentar mecanismos y procedimientos de integración flexibles, dinámicos y socializatorios; el establecimiento de políticas que favorezcan el desarrollo de la educación para una cultura de la integración, que permita a los ciudadanos servirse de los “productos” de la cultura global, re-apropiándose de sus identidades sociales, culturales, ideológicas, étnicas, familiares y psicológicas; que las políticas económicas tiendan a desarrollar y consolidar las capacidades

de acción de las organizaciones de la sociedad civil de la región, promoviendo el acercamiento entre comunidades, ciudades y distritos, para lograr una mayor y mejor interconexión de los ciudadanos a la realidad de sus diversos entornos, de manera que se logren conciliar valores, conocimientos y relaciones interpersonales e interinstitucionales.

Los latinocaribeños estamos necesitados de comprender *todos* y de construir *juntos* la *nueva sociedad*, en medio de las paradojas contemporáneas que tienden contradictoriamente a la unidad y a la fragmentación. Por eso cada vez es más importante que los gobiernos logren que los ciudadanos se sientan y actúen como sujetos de la organización social nacional y de la emancipación individual y colectiva, única manera de alcanzar el bienestar y la verdadera democracia, con todos y para el bien de todos.

Sin esta perspectiva del asunto, no es lograble, de manera efectiva, la integración “hacia adentro” de nuestros espacios vitales, y por tanto los obstáculos para alcanzar la integración “hacia afuera” (en el sentido subregional, regional y mundial) serán mucho mayores. La integración debe ser vertical a la vez que horizontal.

Sin embargo en los últimos años se han observado progresos en la integración regional, en el marco de cierto aperturismo comercial, condicionado además por la mayor creación de espacios de diálogo e intercambio entre gobiernos de la región y el fortalecimiento de los esquemas integracionistas caribeños y sudamericanos. Progresivamente la agenda de cooperación y de integración se ha vuelto más diversificada, sobrepasando los asuntos estrictamente “comercialistas” o simplemente económicos, enrolando y fomentado la discusión y la toma de acuerdos en cuestiones culturales, educativas y sociales en general. Pero los agentes de la sociedad civil, que cada vez ejercen mayor protagonismo en la vida contemporánea, no siempre han podido demostrar e imponer todas sus capacidades y fuerzas, para contribuir al logro de ese bien común que es la integración. Esa debilidad es intranacional pero también regional. Por supuesto que los gobiernos nacionales, las instituciones regionales y en menor medida las supraregionales, tienen el compromiso político de conocer las debilidades y fortalezas de esos otros agentes que mucho pueden y deben hacer en el logro de una cultura y un proceder integracionista;

así como en el uso innovativo y compartido de la educación y las comunicaciones, para promover el cambio social y fortalecer los sentimientos de identidad, cooperación y complementariedad intranacional y transfronteriza de los pueblos que conforman América Latina y el Caribe.

Dentro del sistema de agentes estructurados y dinámicos de cambio social, las universidades y las empresas tienen un rol protagónico, debido al rol que juegan en las transformaciones de la sociedad; pero no siempre los gobiernos poseen la suficiente voluntad política para instrumentar mecanismos racionalizadores que potencien y dinamicen sus funciones sociales.

En el caso de las universidades, es importante apuntar como ellas producen y transmiten la cultura por medio de la investigación, la docencia y los procesos extensionistas. Las universidades:

- desarrollan y estimulan la creatividad y la innovación. Ellas son generadoras de ciencia y cultura; formadoras de buenos o malos profesionales y políticos; frecuentemente aportan destacados líderes a la sociedad política y civil,
- son también creadoras de opinión,
- pueden influir y orientar a los poderes públicos,
- mantienen una posición dialogante permanente con la economía y en general con su entorno y los demás agentes sociales; tanto a nivel territorial, nacional, como internacional,
- contribuyen a garantizar las capacidades de producción y consumo, y aseguran múltiples conexiones con el resto del mundo,
- estimulan la comprensión de la necesidad de cambios y, por tanto, incentivan una mayor apertura al entorno local, regional e internacional y,
- pueden contribuir por diversas vías a reformar las propias estructuras sociales históricamente creadas.

En este sentido se imponen, al menos, dos cuestionamientos: ¿En qué medida los gobiernos apoyan la misión social de las universidades y sus vínculos con el sistema empresarial? ¿Cuánto aprovechan el conocimiento científico que se genera en estas instituciones para establecer con eficacia las políticas públicas, en especial las económicas? Se precisa más imaginación, compromiso y decisiones políticas deliberadas que sean nacionales, regionales, pero sobre todo racionales, para aprovechar, en tanto bien público, la ciencia y la cultura que se genera en las instituciones universitarias de los territorios. Lo gobiernos, si es que quieren contribuir al desarrollo económico y social de sus respectivos países, tienen la obligación legal y el imperativo moral e histórico de establecer alianzas estratégicas con las instituciones universitarias, pero no para satisfacer intereses de una elite o grupo social privilegiado como frecuentemente ocurre, sino con fines más inclusivos y que apunten al verdadero desarrollo humano, de hecho sustentable.

En el caso de América Latina y el Caribe, las universidades pueden y deben ser actores y líderes de ese necesario cambio social integracionista, si logran reformular con apoyo y comprensión de los gobiernos, su propia concepción identitaria, sus propias estructuras, y alcanzar mayores niveles de socialización de sus funciones en la vida de los pueblos; si se transforman en instituciones más abiertas y accesibles, capaces de conducir y favorecer la inclusión constante de más y más ciudadanos en la compleja sociedad del conocimiento y la cultura. Todo esto pasa por la voluntad de una mayor integración investigativa, académica y extensionista intra y extrauniversitaria, que abarque cada país y toda la región en su conjunto, posible de lograr, si los gobiernos e instituciones implicados directa o indirectamente en la cuestión, conciben y construyen estratégicamente su misión.

Por otra parte las comunidades empresariales, que también tienen una función decisiva en estos cambios, están en la obligación ciudadana de promover el conocimiento mutuo, el intercambio sistemático de ideas e información, la formación de vínculos entre las empresas y la colaboración entre sus miembros; la creación de espacios para la reflexión, el esclarecimiento y el debate de las principales cuestiones relativas al devenir económico y político de sus respectivos países y de toda la región; favorecer, por todos los medios posibles el desarrollo de la integración, para contribuir al mejoramiento de la situación

económica y social de sus naciones, en un ambiente de solidaridad para mantener la paz y seguridad, apoyando los esfuerzos dirigidos al fortalecimiento de los conceptos que son parte del desarrollo sustentable, la educación, la salud, y los proyectos culturales en toda la región (Haslam, 2005). La responsabilidad social empresarial tiene que fundarse necesariamente en la decencia y la ética.

El sistema empresarial debe apropiarse y desplegar una filosofía de gestión consciente, responsable y comprometida con el desarrollo integral de la región, la nación, las comunidades y de todos los ciudadanos; por lo que cada empresa debe estar interconectada de manera dialéctica y pluridimensional con el gobierno y la sociedad civil, asumiendo esta filosofía no simplemente como un asunto de relaciones públicas y de búsqueda de utilidades, sino como ejercicio asociado a la responsabilidad social corporativa, que es ética, económica y políticamente necesaria y posible, además de que agrega valor al éxito empresarial y abre nuevas oportunidades para la construcción de una sociedad más justa, sustentable y verdaderamente participativa.

En la contemporaneidad la actividad de la empresa, especialmente la privada, no puede reducirse de manera estrecha al giro de los negocios y al lucro chato; ella también es responsable, como parte integrante de la estructura social y como agente cada vez más dinámico de cambio, de realizar acciones de apoyo a la comunidad y de protección al medio ambiente; práctica que se va haciendo común en algunos países de la región latinocaribeña, bajo la llamada filosofía de Responsabilidad Social Corporativa, concepto que refleja el nuevo papel que el mundo globalizado exige a la empresa. Por ejemplo en México, Argentina, Chile y otros países de la región, se ha venido construyendo con mayor o menor acierto esta manera de ser y de hacer empresarial. Es necesario una filosofía constructiva con la finalidad de que la empresa accione integralmente en las dimensiones económicas, sociales, ambientales y culturales en general, tanto en sus contextos internos como externos, atendiendo a las expectativas e ideales de todos sus participantes: dígame inversionistas, directivos, proveedores, clientes internos y externos, gobiernos, organizaciones sociales y la comunidad.

Por supuesto que el desarrollo de este movimiento ocurre en medio de múltiples contradicciones y debates, que abarcan la cuestión de la voluntariedad y/o la obligatoriedad de las empresas para practicar dicha filosofía y de su posible o no carácter paternalista. Constituye también objeto de discusiones la cuestión de sí realmente se debe incorporar el espíritu de estas actuaciones en los propios planes de medio y largo plazo de la empresa; sin embargo el valor fundamental está en que es un proceso en marcha que redimensiona el papel tradicional de la empresa y que multiplica los nexos sociales de una forma más deliberada y bajo un prisma más humanista y socializador. En este sentido las potencialidades del sistema empresarial para contribuir a los procesos de integración en los ámbitos nacionales y regionales, son enormes.

Pero la complejidad y contradicciones peculiares del proceso de integración latinoamericana, tanto a nivel nacional como regional tiende a ahondarse, no solo por las deformaciones y relaciones de dependencia históricamente heredadas, sino por la fuerte y creciente acción extenuante que sobre este proceso ejercen otras fuerzas hegemónicas y globales que atomizan y debilitan la soberanía y poder de acción de las naciones subdesarrolladas.

Definitivamente se impone la necesidad de lograr volitivamente, consensos constructivos para crear modelos integracionistas más inclusivos y eficaces; basados en una cooperación funcional y en la solidaridad; en una fuerte intencionalidad política de acciones concertadas entre las multifacéticas comunidades, territorios y sociedades que integran la región; con una democracia también alternativa, verdaderamente nueva, que no deje de ser representativa pero que sea, sobre todas las cosas, participativa y protagónica del pueblo real, para alcanzar una articulación que promueva el desarrollo científico, económico, político, social, cultural; en síntesis, el desarrollo humano. Todo lo anterior supone necesariamente, una filosofía basada en la identificación de valores compartidos, identidad nacional y regional y fines comunes, sobre la premisa del reconocimiento y respeto a las diferencias.

En los últimos años se concibió y ha venido avanzando, no sin dificultades, un

nuevo modelo de integración y desarrollo: la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), la que resulta una inédita alternativa frente a las pretensiones y alcances dominadores del ALCA y sus variantes más “suaves”, así como también ante los imperativos de la globalización, la crisis económica y social de la región y los siglos acumulados de deformación y dependencia. Este proceso apunta hacia la conformación de una región más autónoma, equitativa, solidaria y productiva; que incorpora, o por lo menos trabaja en ello, varios de los elementos anteriormente analizados.

Es un modelo de integración que se construye sobre la práctica misma, pero que requiere también de la elaboración de los fundamentos teóricos necesarios. El mismo propone una integración diferente y se enfoca hacia relaciones internacionales bajo principios de solidaridad, reciprocidad, complementariedad, cooperación y sustentabilidad; es decir hacia un mayor equilibrio y equidad internacionales. Se fundamenta en la creación de proyectos y mecanismos para crear ventajas cooperativas entre las naciones, que permitan compensar las asimetrías existentes entre los países del hemisferio (Muñoz, 2006).

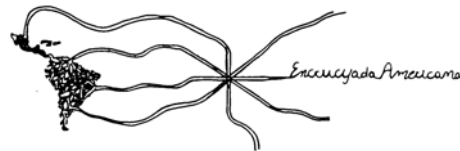
El proceso de integración en marcha pudiera ser el impulso o la vía para construir, en un horizonte temporal no muy lejano, una sólida comunidad regional de tipo grannacioanal ya iniciada como parte del nuevo modelo. Los proyectos y empresas grannacionales son mecanismos que abarcan disímiles áreas y son instrumentados para las transformaciones estructurales de sus respectivos ámbitos. Las mismas poseen un fundamento político y filosófico, que viene dado por la afinidad conceptual de quienes integran el ALBA y de los que sin ser miembros se identifican con ella, en cuanto a la concepción crítica acerca de la globalización neoliberal, el desarrollo sustentable con justicia social, la soberanía completa de las naciones de la región y el derecho a su autodeterminación, generando un bloque en la perspectiva de estructurar políticas regionales soberanas³, lo que constituye una tarea ineludible para intelectuales, políticos y

³ Según la Declaración de la VI Cumbre del ALBA (2008), el concepto grannacional puede semejarse al de mega estado, en el sentido de la definición conjunta de grandes líneas de acción política común entre estados que comparten una misma visión del ejercicio de la soberanía nacional y regional, desarrollando y desplegando cada uno su propia identidad social y política, sin que ello implique en el momento actual la construcción de estructuras supranacionales.³ En esencia, se trata de superar las barreras nacionales y regionales para fortalecer las capacidades locales fundiéndolas en un todo para ser capaces de enfrentar los

cualquier ciudadano comprometido con su identidad y que, salta a la vista, es necesario emprender con inteligencia, intrepidez inmediata, y profunda voluntad política y compromiso con los pueblos reales de la región.

BIBLIOGRAFÍA

- Arruda, Plinio (2008) “Notas sobre los desafíos de la integración latinoamericana”. En “La integración en América Latina: de la retórica a la realidad”. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, Cuba.
- González, Isables (2005) “Las organizaciones empresariales como agentes de cambio social: centros de servicio, presión y liderazgo”. Newsletter, boletín # 71, septiembre 15. Encontrado en el sitio <http://www.accionrse.com>.
- Haslam, Paul (2005) “El espíritu salvaje del desarrollo. El estado de la RSE en América Latina”. Tomado de <http://www.revistafuturos.info>.
- Martí, José (1975) “Nuestra América”. Obras Completas, Tomo 6. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba.
- Muñoz, Roberto (2006) “Cuba ante los desafíos del ALCA y las oportunidades integracionistas del ALBA”. Revista *Isla* No. 48 (149) 144-170.



Revista Encrucijada Americana. Año 4. N° 1. Otoño-Invierno 2010.
Universidad Alberto Hurtado
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Cienfuegos 46 “A”, 2° Piso, Santiago, Chile. Teléfono (56-2) 889 7476.
Email: america@uahurtado.cl

retos de la realidad mundial. Cada día se hace más latente el hecho de que nuestra realidad local es nuestra realidad regional.